



México, Distrito Federal. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acuerdo del día ocho - de marzo de mil novecientos cuarenta.-

V I S T O, para resolver, el presente juicio de amparo directo; y

# R E S U L T A N D O:

I.- Por escrito que elevó a esta Suprema Corte con fecha cinco de junio del año próximo pasado, el Licenciado - Emilio Pardo Aspe, como defensor del Ingeniero J. Jesús - Sánchez Fuentes, ocurre a la Justicia Federal en demanda - de garantías por violación, en perjuicio de su represen- - tado, de los derechos que otorgan los artículos 14 y 20 - fracciones VII, VIII y IX de la Constitución Política, -- que imputa a la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Jus- - ticia en el Estado de Guanajuato, con motivo de la sen- - tencia definitiva que esta autoridad pronunció en grado - de apelación el dos del citado mes de junio, que al modi- - ficar el fallo dictado el veintinueve de junio de mil no- - vecientos treinta y ocho por el Juez de Primera Instan- - cia del Partido de Allende, en la relacionada Entidad, de - clara al quejoso y a sus coacusados León Cervantes y J. Je- - sús Reyna, criminalmente responsables, como copartícipes, - del delito de homicidio calificado perpetrado en las per- - sonas del Ingeniero Roque R. Rubio, y de los campesinos Se- - vero Delgado, Simeón y Cipriano López; aplicando respectiva- - mente a los referidos acusados las sanciones de veinte, quin- - ce y trece años de prisión, impuestas en calidad de retención - hasta por una mitad más de la duración, en su caso, y con -- efectos de suspensión en el ejercicio de los derechos de -- los reos, con apego al artículo 42 del Código Penal. Asi--- mismo los condena; a pagar en forma solidaria y mancomuna--

da, por concepto de reparación del daño: la cantidad de cincuenta mil cuatrocientos pesos, a los deudos del Ingeniero Roque R. Rubio, señores Claudio Rubio, Ana María -- Martínez de Rubio, Claudio, Gustavo, Elena, Natalia y Raymundo Rubio y Martínez, la de cinco mil seiscientos pesos a los familiares del occiso Simeón López, señores Marcos -- y María Pabla López y Susana Delgado, y la de dos mil ochocientos pesos a los del extinto Severo Delgado, señores -- Tránsito Delgado, Severo Delgado Jr., María Luz López y -- Manuela Delgado; absolviendo a dichos procesados, de todo pago por el aludido concepto de reparación del daño, en -- lo que concierne al ofendido Cipriano López. La resolución de que se viene hablando, absuelve, además, a los -- enjuiciados Rafael e Hipólito Mares, José Simeón y Octaviano Rodríguez, J. Jesús Delgado, Isidro Gloria y Marcial Cruz, de la acusación que por el expresado delito -- formuló en su contra el Ministerio Público, mandándolos poner en libertad, y, finalmente, deja abierta la causa por lo que atañe a los inculcados prófugos, Timoteo Peña, -- León González, Santiago, Baldomero, Antonio y León Godínez, Baldomero Pérez, Antonio, José Ponciano y Alejo Gloria, -- Antonio y Juan Rodríguez, José, Dolores, Jesús y Pedro Mares, Julián Vazquez, Tiburcio Guzmán, Martín Pérez, Modesto Juárez y Ezequiel Sandoval, para cuando se logre la -- captura de estos individuos.

II.- La jurisdicción represiva produjo su correspondiente informe justificado, con el que remitió los autos -- originales de ambas instancias. El Presidente de este Alto Cuerpo, por acuerdo de veintiseis de julio del año -- retropróximo, dió entrada a la demanda de que se hace mé-



78

rito, y ordenó que se turnara al Ministerio Público, así como que este expediente corra con el marcado con el número 4724 del año próximo pasado, Sección Segunda, relativo al amparo promovido por el Licenciado Pedro Arizmendi, como defensor de León Cervantes, contra actos del Magistrado de la Quinta Sala demandada en el presente negocio. El Agente del Ministerio Público Auxiliar, designado para intervenir por el Procurador General de la República, por escrito de dieciocho de agosto siguiente, solicita se decrete el sobreseimiento con respecto a los actos reclamados, que se consideran violatorios de las leyes de procedimiento, apoyándose dicho funcionario en la fracción XI del artículo 73 en relación con la III del 74 de la Ley Orgánica que rige la materia; y que se niegue la protección constitucional a Sánchez Fuentes, en cuanto al fondo de la cuestión debatida en esta controversia.

## CONSIDERANDO:

Primero.- La resolución combatida debe estimarse cierta, porque su existencia consta fehacientemente de las actuaciones respectivas que integran las piezas de autos que el Tribunal sentenciador acompañó a su informe justificado. Contradicho fallo, el quejoso aduce como conceptos violatorios de la Ley Suprema, transgresiones a leyes de procedimiento, que pueden resumirse en dos capítulos: a), el de las previstas en las fracciones II, VII, IX, XV y XVII del artículo 160 de la citada Ley Reglamentaria, toda vez que no se le permitió nombrar defensor en la forma que la ley local determina, ni se le facilitó, en su caso, la lista de los defensores de oficio, así como que -

tampoco se le hizo saber el nombre del adscrito al Juzgado que conocía de la causa, a pesar de que no tenía quien lo defendiera, porque la persona de su confianza designada por él al efecto, no concurrió a la audiencia por defecto en la citación respectiva, de suerte que no le asistió en ese acto. Además, se le desecharon los recursos -- que tenía conforme a la ley, al no tenérseles por interpuestos, respecto de providencias que, afectando partes sustanciales del procedimiento, produjeron materialmente la indefensión de acusado, tanto para que conociera las conclusiones acusatorias y formulada dentro del término legal correspondiente las que procedieran, cuanto al celebrarse la audiencia en el juicio. Considera el ocurrente -- que de lo expuesto se deriva la infracción de los artículos 41, 63, 64, 98 fracción III, 102, 104, 291, 297, 298, 308, 309, 359, y 380 fracciones III, VI, y XI, del Código de Procedimientos Penales que rige en el lugar. b) El -- concerniente a la fracción VIII del artículo 20 del Pacto Político en consulta, por haber transcurrido un término mayor que el fijado por dicho precepto para que se juzgue a los reos. En cuanto a transgresiones de leyes sustantivas, se refiere el quejoso a la inexacta aplicación de los artículos 41, 56 fracción III, 63, 64, 98 fracción III, 102, 104, 261 fracción II, 268, 269, 270, 271, 272, 276, 277, 278, 281, 282 y 283 de la citada Ley de Enjuiciamientos Penales, y 9o., 25. y siguientes del capítulo V, Título 2o. del Libro Primero, y 259, 272, 275 y 277 del Código Penal, atendiendo a que la jurisdicción sentenciadora hace una incompleta relación de hechos y aprecia indebidamente los testimonios de J. Jesús Reyna, Luis Ramírez, Gregorio López, Susana Delgado, Julian Yáñez, Felipe

79



López, J. Jesús Hernández, Margarito y Encarnación Zamora, Ines Villafuerte, Juan Juárez, Macedonio Muñoz, Miguel -- García, Julio Sánchez, Eutiquito Martínez (Eutiquito Hernández Salazar, por otro nombre) y Jesús Piña; e incurren en una estimación errónea de los atestados de Ricardo Calderón e Ingenieros Benjamín Castro Tinoco y Salvador del Castillo, estando este último contradicho por el certificado de autopsia. Agrega que la potestad común desestima infundadamente la declaración del coronel J. T. Rodríguez, y las de Rafael Mares, Hipólito Mares, Jose Rodríguez, -- J. Jesús Delgado, Simeón Rodríguez, Isidro Gloria, Octaviano Rodríguez y Manuel Cruz, y que la autoridad resolutoria al absolver a los nombrados, destruye los argumentos lógicos de la sentencia de primera instancia, porque la responsabilidad de Sánchez Fuentes, tiene por supuesto imprescindible la de aquéllos; existiendo duda sobre el modo y grado de participación jurídicamente atribuible al acusado, para definir su precitada responsabilidad en el delito que se le imputa, sin que, por último, en la sentencia se pruebe, en función de actos establecidos por la instrucción, ni uno ni otro de los medios de participación en los acontecimientos criminosos reprimidos, conforme lo prevé el invocado artículo 9o. de la Ley Punitiva aplicable.

Segundo.- En la presente controversia constitucional, se suscitan dos cuestiones que deben estudiarse y decidirse previamente a las de fondo: la primera atañe al sobreseimiento que solicita el Ministerio Público, con apoyo en la fracción XI del artículo 73, concordada con --



la III del 74 de la Ley Orgánica correspondiente, porque - el quejoso en su demanda de amparo, reconoce que al interponer el recurso de apelación contra el fallo de primera - instancia, consistió expresamente en las violaciones adjetivas, que son ahora materia de su reclamación. Esta - causal de improcedencia no es atendible, porque la circunstancia de que el ocurrente se hubiese allanado durante la alzada a las precitadas transgresiones procesales, - en modo alguno puede implicar por su parte una manifestación de voluntad que entrañe el consentimiento del acto - debatido, esto es de la sentencia condenatoria, y por - tanto la argumentación que se analiza, puede ser eficaz - para fundar la negativa de la protección constitucional, pero no para que el juicio se sobresea, siendo, en consecuencia, de desecharse esta pretensión por no ser aplicable al caso la disposición legal que se invoca como fundamento de la misma. La segunda de las cuestiones de que se viene hablando, tiene preferencia en su examen y resolución de acuerdo con lo estatuido por el artículo 183 del - Estatuto Reglamentario en consulta, y consiste en conculcaciones de carácter procesal, mismas que se condensaron al principio del Considerando que antecede. Tales impugnaciones también son inoperantes, pues con respecto a - las basadas en las fracciones II a VII, IX, XV y XVII, - del artículo 160 de la Ley Orgánica de que se trata, salta a la vista que, como lo sostiene la jurisdicción sentenciadora al final del Considerando Segundo de su determinación, el defensor del recurrente se desistió de su - solicitud sobre reposición del procedimiento, conformándose tácitamente con las irregularidades que pudieran haber -



-4-

existido, las cuales quedaron purgadas, ya que para ser -- deducidas en esta vía, se requiere conforme al artículo -- 161 del aludido Ordenamiento, que sean combatidas en primer grado, y protestadas, en su caso, para hacerlas valer como agravio durante la apelación. Por lo que concierne -- a que no se juzgó al reo dentro del término señalado por -- la fracción VIII del artículo 20 de la Ley Suprema, se de -- sestima con solo tener en cuenta que la jurisprudencia de -- este Alto Tribunal, se ha orientado uniformemente en el -- sentido de que el amparo en tales casos, no puede tener -- por efecto que se ponga en libertad al reo, sino el de -- obligar a la autoridad responsable a que falle desde lue -- go el proceso, absolviendo o condenando al inculcado, y -- como esto ya tuvo lugar en la especie, es inconcuso que -- la anomalía argüida por el quejoso, quedó consumada irre -- parablemente, y, por ende, carece de consistencia para fundar la protección federal que se demanda. En esta virtud, deben desecharse las dos cuestiones de previa resolución que -- han sido objeto del anterior análisis, para considerar -- los conceptos violatorios alusivos a normas substantivas.

Tercero.- Las impugnaciones del quejoso, convergen a su responsabilidad criminal, pues juzga que ésta no se -- demostró cumplidamente en función de actos establecidos -- por la instrucción, toda vez que existe duda sobre su participación delictiva y la potestad común la tiene por acreditada, incurriendo en una incompleta relación de hechos -- y en la indebida apreciación de los atestados que se reca -- baron en la causa, así como en la ilegal desestimación de -- lo depuesto por el Coronel J. T. Rodríguez, y por los tes --

tigos Rafael Mares, Hipólito Mares, José Rodríguez, J. Jesús Delgado, Simeón Rodríguez, Isidro Gloria, Octaviano - Rodríguez y Manuel Cruz. Destacada, pues, la objeción central del ocurrente en que no se comprobó su intervención - en los acontecimientos que culminaron con la muerte del -- Ingeniero Roque R. Rubio, y de sus acompañantes Cipriano - López, Severo Delgado, y Simeón López, resulta necesario - desde luego para la perfecta comprensión del problema, - apreciar los razonamientos de que se vale la Sala demandada para establecerla, los cuales se consignan en el Considerando Quinto de la sentencia recurrida, que dice: "Como elementos tendientes a comprobar la responsabilidad penal de los inculpados J. Jesús Sánchez Fuentes y León Cervantes, en la perpetración del cuádruple homicidio, objeto - de este procedimiento, obran en el expediente los siguientes: 1o.- La circunstancia consistente en que los hoy occisos Simeón y Cipriano López figuraron como solicitan--tes en la dotación ejidal del predio "La Petaca", circunstancia que se ha comprobado plenamente, por medio del ejemplar del Periódico Oficial del Estado, agregado a fojas -- 151 ciento cincuenta y uno del Segundo Volúmen, correspondiente al número 53 cincuenta y tres de fecha 30 treinta - de diciembre de 1934 mil novecientos treinta y cuatro, en cuyo ejemplar aparece publicada la solicitud sobre dotación de tierras de la citada finca, que suscriben, entre - otros, los mencionados Simeón y Cipriano López; y además, - con la copia certificada de la misma solicitud de ejidos, proporcionada por la Comisión Agraria Mixta de esta Capital, así como del censo que sirvió de base para decretar -





-5-

la dotación provisional. Estos documentos constituyen una prueba plena en los términos del artículo 272 doscientos - setenta y dos del Código Procesal. 2o.- Declaración de J.- Jesús Reyna, en cuanto asegura que el día en que se desarrollaron los hechos que se investigan en este proceso, - los señores León Cervantes y Timoteo Peña <sup>A</sup> lo invitaron -- para que, en compañía de los individuos que el mismo de-- clarente señala, se presentase ante Ezequiel Sandoval, - quien les proporcionaría armas <sup>C</sup> y parque en cantidad sufi-- ciente, para que fuesen a matar al Ingeniero Roque R. Ru-- bio, y a los agraristas que intervenían en el reparto de - tierras de "su patrón"; que como a las 12 doce horas, to-- dos se reunieron en el lugar denominado "La Grulla de Aba-- jo", en donde <sup>E</sup> platicaron durante 3 tres horas para pla-- near el asunto, habiendo recibido todos de manos del cita-- do Sandoval, armas y parque; que después de haber ingeri-- do pulque en "Santas Marías", se encaminaron hacia los -- bordes, en donde sabían andaban trabajando el Ingeniero Ru-- bio y sus agraristas; que León Cervantes y Timoteo Peña, <sup>S</sup> dirigieron todo lo relativo a la disposición de los tira-- dores y demás circunstancias relativas, hasta llegar a la consumación de los asesinatos; que a continuación, todos - se dirigieron a la tienda de Apolonio González, en cuyo - lugar los mencionados Cervantes y Peña; repartieron dine-- ro entre todos los que intervinieron en el crimen, excep-- to el declarante; que sabe, por haberlo presenciado, que - los señores Jesús Sánchez Cervantes y el hijo de éste, In-- geniero Jesús Sánchez Fuentes, como dos días antes del de-

los hechos a que se refiere, entregaron a los aludidos -- León Cervantes y Timoteo Peña, en la hacienda "La Petaca", el dinero que estos últimos debían distribuir entre los -- asesinos de Rubio y campesinos citados.-- Este testimonio, que tiene un elemento de cargo directo sobre la responsabilidad de los acusados Jesús Sánchez Fuentes y León Cervantes, se toma en consideración con el valor presuncional que le otorga la fracción I. primera del artículo 262 doscientos ochenta y dos del Código de Procedimientos Penales de acuerdo con la facultad que conceden al Juzgador los preceptos 268 doscientos sesenta y ocho y 277 doscientos setenta y siete del mismo Cuerpo de Leyes, pues si -- bien es cierto que el declarante Reyna tiene el carácter -- de coacusado en este proceso, tal situación jurídica no invalida en forma absoluta su testimonio de cargo, puesto -- que, en su declaración se advierte que admite la responsabilidad que le resulta en el cuádruple homicidio de que se trata y solo formula las imputaciones en contra de los -- tantas veces repetidos Jesús Sánchez Fuentes y León Cervantes, por la necesidad misma del relato verídico de los acontecimientos en que se vió inmiscuido.-- Por otra parte, la circunstancia consistente en que Reyna no recibió remuneración alguna de parte de León Cervantes, es un dato -- más que indica veracidad en su dicho, pues es lógico y humano suponer que, no obstante el peligro a que el propio -- Reyna se expuso, interviniendo en los asesinatos al percatarse que de todos los participantes en el crimen fué el -- único que no recibió recompensa alguna, se vió compelido --



-6-

a delatar a sus injustos jefes, por un instinto natural-- de venganza.- Además, aunque es verdad que J. Jesús Heyna produjo la retractación de su dicho, dada su calidad de -- acusado, tal retractación, por las razones que se aducen -- en el Considerando anterior, no puede invalidar su declara- ración primitiva.- 3o.- El hecho perfectamente justificado, respecto a que J. Jesús Sánchez Fuentes y León Cervantes, -- propietario y mayordomo, respectivamente, de la hacienda -- "La Petaca", siempre demostraron odio en contra de los cam- pesinos asesinados, con motivo de la solicitud que éstos -- hicieron sobre dotación de tierras, de la citada finca y -- predios anexos; este hecho se acredita en forma plena, -- por medio del testimonio, uniforme substancialmente, de -- Luisa Ramírez, Gregoria López, Susana Delgado, Julián Ya- rez, Felipe López, Ricardo Calderon, J. Encarnación Zamora, Miguel García y Julio Sánchez, cuyos testimonios explican las diferentes formas de que usaban Sánchez Fuentes y Cer- vantes para demostrar ese odio en contra de los solicitantes de ejidos, ya sea por medio de injurias, amenazas indi- viduals de muerte, amenazas generales en contra de los -- agraristas, etc; existiendo a mayor abundamiento la pro- pia confesión a ese respecto del inculpaado Sánchez Fuen- tes, hecha ante el Ministerio Público según consta a fojas 28 veintiocho del primer volúmen, en cuya declaración -- afirma que obstruccionaba los trabajos de los agraristas, no permitiéndoles barbechar, impidiendo que cortaran los -- carrizos que destinaban a la fabricación de canasta, o -- bien por medio de las instrucciones que dió a León Cervan-

tes en el mismo sentido; y agrega que esto lo hizo cuando supo que Simeón, Cipriano y Felipe López, Julián Yañez y Severo Delgado se andaban "metiendo de agraristas".-- Indudablemente y esto por razones de orden psicológico, esos deseos de obstrucción a los ejidatarios tomaron mayor intensidad, cuando de la solicitud se pasó a la determinación y distribución de las tierras materia de la dotación ejidal de "La Petaca".-- Este hecho demuestra la predisposición de los acusados, en contra de los agraristas que fueron causa de que parte de las tierras de la hacienda "La Petaca" y sus anexos, se distribuyeran entre los ejidatarios a quienes correspondía el derecho, de acuerdo con la ley de la materia, predisposición que humanamente implica el natural deseo de venganza en contra de los ejidatarios de "La Petaca", entre los cuales figuraron los ahora occisos Severo Delgado, Simeón y Cipriano López, venganza igualmente explicable en contra de los funcionarios y empleados encargados de deslindar o dar posesión de los ejidos, como lo era el Ingeniero Agrónomo Roque R. Rubio, -- según consta en autos.-- 4o.-- El hecho igualmente acreditado en este proceso, consistente en que, a pregunta formulada por el Comandante del 19 diecinueve Regimiento, un peón al servicio de los acusados, en la hacienda "La Petaca", informó que el Administrador de dicha finca es uno de los individuos que se encuentra inodado en la comisión de los asesinatos de las personas que figuran como occisos en este expediente. Sobre este hecho declara igualmente el Ingeniero Salvador del Castillo. La natural sencillez del campesino, especialmente si en el caso el militar formuló de improviso la pregunta, son motivos para --



-7-

83

admitir que el peón interrogado se produjo con verdad, -- sin mediar las consecuencias que su dicho acarrearía a su jefe (el Administrador de la hacienda).-- 5o.-- El hecho -- muy significativo, sobre que el día de los hechos, ninguna partida rebelde incursionó en la zona que comprende -- la hacienda "La Petaca" y predios anexos, según se desprende del informe que rinde el Coronel J. Trinidad Rodríguez L., Comandante del Regimiento residente en San Miguel Allende, que obra a fojas 33 treinta y tres del primer volumen, documento que tiene valor probatorio pleno -- en los términos del artículo 272 doscientos setenta y dos del Código Procesal. Este nuevo dato justifica también -- que, si no hubo incursiones extrañas de las partidas rebeldes que en aquel entonces, merodeaban por la zona de -- San Miguel Allende, necesariamente debe atribuirse al hecho delictuoso que se estudia, a los individuos que habitan en dicha zona, a los habitantes de la hacienda "La -- Petaca" y predios anexos, cuyos individuos indudablemente -- tienen relaciones de amistad, respecto y sujeción con los propietarios y administradores de las respectivas fincas de su domicilio, razones por las que solo con el asentimiento de estos últimos pudieron realizarse los bochornosos asesinatos que se investigan.-- 6o.-- Existe además otro hecho digno de mencionarse, consistente en que con anterioridad a los acontecimientos materia de esta causa criminal, se verificó movimiento de gente en los ranchos -- "La Grulla", "Rancho Nuevo" y "La Petaca", según lo testifican Julián Yañez, Felipe López y Ricardo Calderon. --



- -

Este hecho viene a robustecer los elementos anteriores - que se analizan, sobre que nadie más que los habitantes - de los predios citados fueron los que tomaron participación en los homicidios del Ingeniero Rubio y sus acompañantes.- La fuerza probatoria de los indicios o presunciones, debe estimarse de acuerdo con la legislación del Estado (artículo 283 doscientos ochenta y tres del Código de Procedimientos Penales), tomando como base la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace natural, más o menos necesario que existe entre la verdad conocida y la que se busca; apreciándose por el Juzgador para resolver en conciencia su valor probatorio, hasta el grado de admitirlas en conjunto, como una prueba plena. Acorde con esta tesis puede citarse la jurisprudencia definida de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, según aparece en el folio 181 ciento ochenta y uno del Apéndice al Tomo L. del Semanario Judicial de la Federación, en los párrafos que en seguida se transcriben:- "PRESUNCIONES.- Esta prueba, considerada según la doctrina, como prueba artificial, se establece por medio de las consecuencias que sucesivamente se deduzcan de los hechos por medio de los indicios, siendo necesario que estos hechos estén en relación tan íntima con otros, que de los unos se llegue a los otros por medio de una conclusión muy natural, por lo que es necesario la existencia de dos hechos; uno comprobado y el otro no manifiesto aún, y que se trata de demostrar, racionando del hecho conocido al desconocido, - siendo esta doctrina la adoptada por nuestra legislación. Tomo III.- Araiza Prócoro, página 1298.- Tomo XXII.- Só-



-8-

foro Emilio, página 357.- Tomo XXVII.- Estrada Máximo P. página 1812.- Salas Elías, página 2834.- Rubio María Guadalupe, página 2834.- PRUEBA PRESUNTIVA. Los jueces federales están facultados para apreciar, en conciencia, el valor de la prueba presuntiva en materia penal. T. XXV.- Macías Alejandro.- Pag. 217.- PRUEBA PRESUNTIVA.- Los tribunales, según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace más o menos necesario que existe entre la verdad conocida y la que se busca, apreciarán en conciencia, el valor de las presunciones, hasta el grado de poder considerar que su conjunto forma prueba plena T.- XXV.- Uribe Julio.- Pag. 1514.- PRUEBA PRESUNTIVA.- Esta prueba se establece por medio de la consecuencia que sucesivamente se deduce de unos hechos que están en relación tan íntima con otros, que el juez llega de los unos a los otros, por medio de una conclusión muy natural; por eso es necesario que unos hechos sean comprobados y los otros estén por demostrarse, para que, racionalmente, de los conocidos se llegue a los desconocidos; de manera que es indispensable que el juez en su sentencia haga este raciocinio, y no que se limite a decir que existe la prueba de presunciones. T. XXVI.- Gutiérrez Peláez Higinio.- Pag. 737.- PRESUNCIONES.- Para la apreciación de la prueba de presunciones deben someterse los jueces a dos reglas fundamentales; la., que se encuentren probados los hechos -- de los cuales se derivan las presunciones; y 2a., que exista un enlace natural más o menos necesario, entre la verdad conocida y la que se busca, de modo es que si los Tri-

bunales se apartan de estas reglas, infringen la disposición legal relativa y, por ende, las garantías individuales. T. XXX.- Carrasco García Marina.- Pag.1402.- PRUEBAS PRESUNTIVAS.- Los hechos de que las presunciones se derivan, deben estar probados; y entre los hechos conocidos y acreditados y los que tratan de probarse por medio indirecto, debe haber una relación más o menos necesarias y de la mayor o menor fuerza de la relación, dependerá que la presunción deducida sea más o menos grave, siendo de advertirse que el enlace que ha de buscarse entre la verdad conocida y el hecho que se averigua, ha de ser objetivo y no puramente subjetivo; es decir, debe ponerse de manifiesto y ser digno de aceptarse por quien lo examina -- con recto criterio. Los tribunales de segunda instancia -- tienen facultades para hacer un nuevo análisis, y, en su caso podrán considerarlas con un valor diferente del que se le haya asignado por el inferior. T. XXXIV.- Agente -- del Ministerio Público Federal.- Pag.-1205.- PRESUNCIONES.- Las presunciones no constituyen una prueba especial, independiente de las otras, sino que a cualesquiera de ellas -- deberá acudir, para acreditar el hecho en que la presunción tenga origen; y para deducir la consecuencia que es lo característico de aquella, no hay forma procesal -- determinada, sino tan solo la disposición legal que establece el enlace del antecedente y el consiguiente, por -- el criterio racional que lo aprecia. T. XXXIV. Medina Canto Manuel y coags.- Pag.2638".- En el caso, se han acreditado como antecedentes, que Jesús Sánchez Fuentes, asistido de León Cervantes, demostraron en diferentes formas y -- ocasiones, el disgusto y animadversión que sienten en con-



-9-

tra de los ejidatarios de "La Petaca" y predios anexos; claro es que humanamente han estado dispuestos a causar toda clase de males a dichos ejidatarios, inclusive la muerte, según lo declaran los testigos que se listan al señalarse el indicio enumerado en tercer término, independientemente de que la propiedad de las ~~terras~~ <sup>terras</sup> corresponda a los acusados o a sus familiares; pues el solo interés que ambos procesados (Sánchez Fuentes y Cervantes) han ostentado, para evitar por todos los medios que han tenido a su alcance, la dotación de tierras a los campesinos de la región justifica <sup>completamente</sup> su intervención en los hechos delictuosos objeto de este procedimiento penal y esta presunción debe calificarse como vehementísima, pues del proceso no consta que los occisos hubiesen tenido alguna otra enemistad y dicha presunción, por otra parte, se encuentra perfectamente eslabonada con los demás indicios, pues el dicho de Jesús Reyna, Julián Yáñez y Felipe López concuerdan en la parte relativa, con los antecedentes de hostilización que sufrían los campesinos hay occisos, por parte de Sánchez Fuentes y Cervantes; concuerda también con otra de las presunciones, consistente en que el día de los hechos, ninguna incursión rebelde se presentó en la zona que comprende los predios afectados y en tal virtud, la responsabilidad recae ineludiblemente en los moradores de los aludidos predios. Además, un movimiento de 50 cincuenta hombres armados, no puede pasar desapercibido para los que manejan, dirigen o administran una finca de campo, siendo la actitud pasiva de Sánchez Fuentes y Cervantes, un motivo más que induce a creer fun-

dadamente, su anuencia, autorización y aun orden en favor de los actos trastornadores que culminaron con el asesinato del Ingeniero Rubio y campesinos acompañantes de éste; tanto más si se tiene en cuenta que León Cervantes se encontraba en "La Petaca", en el momento en que se verificaron los citados asesinatos, circunstancia que hace presumir fundadamente que el propio Cervantes conocía ampliamente todos los movimientos que se llevaron a cabo; por estos razonamientos, dado el enlace lógico que existe entre los hechos materia de las presunciones que se analizan, entrañan convicción íntima y plena de culpabilidad en contra del Ingeniero J. Jesús Sánchez Fuentes y de León Cervantes; cualesquiera que haya sido la forma en que dichos acusados tomaron participación, ya sea en la preparación, concepción o ejecución de los homicidios, su responsabilidad es indudable, atento lo dispuesto en el artículo 9o. noveno del Código Penal vigente en el Estado; debiendo, en consecuencia, establecerse que por este nuevo capítulo, no obra agravio alguno que sea motivo de reparación".

Cuarto.- Esta Primera Sala difiere del criterio que sustenta la autoridad represiva en sus precedentes argumentaciones, porque analizadas las constancias que integran la causa criminal instruida contra el quejoso, concluye que ni por prueba directa, ni por indiciaria, se encuentra plenamente demostrada su responsabilidad. No por la primera, en virtud de la ausencia completa de la misma; tampoco por la segunda, si se atiende a que los datos que sobre el particular enuncia el fallo objetado, no son bastantes para constituir el acervo probatorio presuncio-



86



-10-

nal evaluado por el artículo 283 de la Ley de Enjuiciamientos Penales vigente en el lugar de los hechos, conforme -- al cual, los jueces y tribunales, según la naturaleza de -- los hechos, la prueba de ellos y el enlace natural, más o menos necesario, que existe entre la verdad conocida y la -- que se busca, apreciarán en conciencia el valor de las -- presunciones hasta poder considerar su conjunto como prueba plena. Bien sabido es que con arreglo a la doctrina, -- la demostración indiciaria se estima perfecta, cuando el -- hecho que se quiere acreditar tiene una relación de causalidad, o, en otras palabras, está necesariamente ligado como un efecto a su causa, con uno o con varios indicios -- agrupados, derivados de hechos indubitables. La jurisprudencia, cihéndose a la naturaleza jurídica de la prueba -- de que se viene hablando, ha reconocido invariablemente -- como requisitos de su apreciación, tanto que se encuentren acreditados los aludidos hechos de donde emergen las presunciones, cuanto que haya un enlace natural, más o menos necesario, entre la verdad conocida y la que se juzga, de -- tal manera que de la mayor o menor fuerza de interdependencia que una esos extremos, resultará que la presunción -- deducida sea más o menos grave o vehemente, debiendo ser -- objetivo dicho enlace para que pueda ponerse de manifiesto, y aceptarse dentro de un criterio lógico. En la especie, la lectura del Considerando Quinto transcrito, mismo que funda la incriminación del acusado Sánchez Fuentes, -- vuelve ostensible que, con exclusión de toda prueba directa, tal incriminación se deriva de presunciones que la -- autoridad sentenciadora desprende de atestados que para -- su mejor examen pueden dividirse entres categorías: a), --

las documentales consistentes en el ejemplar del Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, agregado a fojas -- ciento cincuenta y una del Segundo Volúmen de que está formado el expediente, periódico que corresponde al número 53 cincuenta y tres, de fecha treinta de diciembre de mil novecientos treinta y cuatro, y que contiene publicada la solicitud sobre dotación de tierras ejidales de la Hacienda de "La Petaca", solicitud formulada por los occisos Simeón y Cipriano López en unión de otras personas; y en la copia certificada de dicha petición de ejidos, expedida por la Comisión Agraria Mixta de esta Capital, así -- como del censo que sirvió de base para decretar la dotación provisional, y el informe que produjo el coronel J. Trinidad Rodríguez L., Comandante del Regimiento residente en San Miguel Allende, glosado a folios treinta y tres del primer volumen de los autos. b) El núcleo de declaraciones rendidas por Luisa Ramírez, Gregoria López, Susana Delgado, Julian Yáñez, Felipe López, Ricardo Calderón, J. Encarnación Zamora, Miguel García y Julio Sánchez; y c) El testimonio de J. Jesús Reyna, coacusado del quejoso. Las -- documentales de que ya se hizo mérito, estimadas por la potestad común, con pleno valor en términos del artículo -- 272 del Código Procesal en consulta, ya sea que se las -- considere aisladamente, o adminiculadas con las restantes demostraciones, aun cuando tienen eficacia para comprobar la existencia de una cuestión ejidal en tierras de la expresada Hacienda de "La Petaca", no son suficientes para -- infundir en el ánimo del Juzgador la convicción presuntiva de que Sánchez Fuentes, en su carácter de administrador



de aquel fundo, se sintiera impulsado a cometer el crimen reprimido en el grado que se le atribuye, esto es como co-partícipe en su realización para evitar la consiguiente - dotación de tierras a los campesinos solicitantes, pues - como se verá enseguida, no está demostrado que el propio - quejoso, por sus antecedentes personales ~~tiene~~ la capaci- dad para delinquir en la forma que se le supone, ni que - esa dotación ejidal hubiese exacerbado su ánimo hasta el - extremo de ofuscarlo y de hacerlo intervenir en los he- chos sangrientos de que se trata, no siendo, por lo demás, lógico establecer la precisa relación de necesidad en- tre la existencia de la multitudada cuestión agraria y - los actos antijurídicos que se sancionan, como es fácil - apreciar en la generalidad de los casos en que se operan tales cuestiones. Con respecto a lo depuesto por Luisa Ra- mírez y los demás testigos nombrados en la categoría b), - se impone hacer una distinción, estudiando en primer tér- mino a los depositados de los que no tienen el carácter de - testigos presenciales, para analizar a continuación los - de Julián Yáñez y Felipe López, quienes dijeron ser super- vivientes de los sucesos en que perdieron la vida el Inge- niero Roque R. Rubio y sus acompañantes. De lo depuesto - por Luisa Ramírez, aparece que al identificar el cadáver de su padre Cipriano López, se limitó a decir que nada le con- ta sobre la muerte de éste, pero que supone fué causada - en virtud de los odios que le tenían León Cervantes, ma- yordomo de la Hacienda "La Petaca" y el propietario de la - misma, señor Jesús Sánchez Jr., desde que su padre en - unión de otros vecinos del Rancho, hizo la solicitud de -

dotación de tierras para trabajar. Que por la señora Susana Delgado sabe que el mayordomo pasó para "La Grulla", - ayer como a las ocho de la mañana y regresó como dos horas después, ignorando el objeto de su viaje. La veracidad de esta testigo, es muy dudosa, pues al ser careada con el procesado negó haber hecho la anterior declaración, expresando que solamente contestó a pregunta que le hiciera el Ingeniero Salvador del Castillo, sobre quiénes eran los vecinos que tenían enemistad con Cipriano y Simeón López: "que no podía dar satisfacción por ser casada y solamente la familia de los muertos podía precisar las personas con quien tenían enemistad los parientes". Además, -- a fojas seis y siete del tercer volumen de la causa, obra una certificación de la que aparece que la expresada Ramírez fué enjuiciada y sentenciada por falsedad en declaraciones judiciales, condenación que vicia legalmente el -- crédito que debiera merecer el testimonio de la Ramírez -- quien sin duda afectada por el sentimiento que le produjera la vista del cadáver de su padre, supuso el cargo -- del que más tarde se retractó, a pesar de que había dicho que con respecto a esa muerte nada le constaba. La testigo Gregoria López, al identificar el cadáver de su padre Cipriano López, se contrajo a exponer la misma negativa -- que la anterior, o sea que no le consta nada agregando -- que existían disgustos entre su referido padre y el mayor domo de la finca León Cervantes, en connivencia con el -- propietario Jesús Sánchez Jr., por el hecho de que su padre era agrarista; que una ocasión el mencionado Sánchez, fué expresamente a la casa de su padre a injuriarlo, por --



-12-

que era ejidatario y le daba coraje verlo barbechar en tierras que decía no eran suyas. Independientemente de que practicado un careo entre la aludida deponente y el acusado Jesús Sánchez Fuentes, aquélla negó su declaración antes señalada, con facilidad se advierte que la circunstancia de que estuvieran disgustados Sánchez Fuentes y López, no implica necesariamente que el primero haya intervenido en la ocisión del segundo. Ricardo Calderón, -- declaró como testigo auricular, reproduciendo el informe -- que sobre los hechos le proporcionaron los supervivientes Julián Yáñez y Felipe López, agregando haber tenido conocimiento con anterioridad por los mismos miembros de la -- Defensa Agraria que el dueño de la hacienda, Jesús Sánchez Jr., verbalmente los había amenazado de muerte, diciéndole que él personalmente no lo haría, pero que tenía gente para realizarlo y dinero suficiente, todo porque habían solicitado tierras de la citada hacienda. J. Encarnación Zamora, después de afirmar que nada le consta sobre los hechos investigados, agregó que en cierta ocasión se presentó a informar al señor Jesús Sánchez Fuentes, respecto al estado de unos bueyes golpeados, y éste lo increpó acremente para que le pagara dos pesos que le debía y le manifestó muy enojado, que ojalá los peones de Rancho Nuevo se hicieran agraristas para que "se los llevara la.....(aquí una palabra soez) a todos". Concluye -- dicho testigo respondiendo a pregunta especial que se le hizo, que ignora por completo quienes hayan podido ser -- los autores del crimen ni tiene idea alguna sobre el par-



particular. Miguel García, en términos más o menos vagos como los anteriores, declaró no saber nada con relación a los sucesos de que se viene hablando, agregando que el patrón y el mayordomo hostilizaban a los agraristas, impidiendo que Simeón López y Severo Delgado barbecharan tierras, y a pregunta que le fué hecha respondió que por lo que ya tiene expuesto supone que fueron el patrón y León Cervantes los autores del crimen, pues con el dinero que aquél tiene pudo haber pagado gente para que cometiera el delito. Finalmente Julio Sánchez depuso en el sentido de que nada sabe en cuanto a los hechos de referencia, con testando a pregunta que se le hizo, que León Cervantes y el patrón Jesús Sánchez Jr., tenían mala voluntad a los agraristas, y no les dejaban cultivar sus terrenos, porque decían que no eran propiedad de los mismos. Que recuerda que hace aproximadamente un mes, estaban sentados en los pollitos de la puerta de entrada a la casa de la hacienda, León Cervantes y Baldomero González, platicando, cuando oyó que el primero decía al segundo: "que los agraristas ya lo tenían enmuinado", porque querían su terreno y quisiera que los mataran a todos, y que seguramente el mayordomo se portaba mal con los agraristas, porque así se lo había ordenado el patrón. Agrega que Baldomero González también hostilizaba a los ejidatarios, hasta el extremo que en cierta ocasión Julián Yáñez y Felipe López lo querían matar; que esto sucedió en la fiesta de San Isidro el día quince de mayo de mil novecientos treinta y siete. En el careo llevado a cabo entre el propio testigo y el inculpado Sánchez Fuentes, aquél aclaró su declaración en el sentido de que no le consta que este último



-13-

89

se haya opuesto a que los agraristas cultivaran sus terrenos, y que tampoco ha oído decir que se opusiera a que sembraran los agraristas, ni que el Ingeniero Sánchez les tenga mala voluntad. En cuanto a las declaraciones de Julián Yáñez y de Felipe López, quienes por su condición de superviviente son los únicos que deponen como testigos -- presenciales de los actos criminosos de que se viene hablando, aparece substancialmente que se encontraban ambos en unión de los ejidatarios Cipriano López, Severo Delgado, Simeón López y el Ingeniero Agrario Roque Rubio, midiendo un terreno que se les iba a repartir en el rancho conocido por "Rancho Nuevo", perteneciente a la Hacienda de "La Petaca", cuando oyeron primero un tiro, después -- otros dos y al poco rato se dieron cuenta de que un grupo como de cincuenta individuos armados era quien había hecho los disparos y los estaba rodeando; que los dicentes -- clavaban una estaca y con este motivo se habían separado del Ingeniero y de los demás compañeros, como unos veinti -- cinco metros; que al darse cuenta de que el grupo referido les estaba tirando balazos, se metieron a un arroyo -- inmediato en donde se "afortinaron" para resistir hasta -- lo último; que al ver avanzar a los asaltantes, hacia -- ellos, los emitentes hicieron varios disparos contra aquella avalancha de gente, logrando causarles dos bajas; -- que entonces éstos se dirigieron tirando hacia el sitio en que se encontraban el Ingeniero Roque Rubio, Simeón y Cipriano López, así como Severo Delgado, y como éstos no estaban "afortinados", sino en campo descubierto, los de-

la voz vieron que el primero en caer muerto fué el expresado Ingeniero, después Severo Delgado y por último, Siemeón López, quien se "afortinó" en un mezquite, pero que al fin salió vencido por la superioridad numérica de los asaltantes; que al darse cuenta de que solo quedaban los deponentes, éstos emprendieron la huida con dirección al monte de "La Estacada", y aunque fueron perseguidos por los malhechores, no lograron hacer blanco; que corrieron por espacio de tres horas hasta llegar a Tequisquiapan, donde pidieron auxilio al Destacamento Federal, poniendo en conocimiento del mismo todo lo sucedido; que debido a un fuerte aguacero que caía cuando iban corriendo, pudieron perderse de vista a sus atacantes, logrando de esta manera salvarse; que un cuarto de hora antes de los hechos, vieron pasar corriendo a caballo a un individuo desconocido, y a los pocos momentos ese mismo sujeto encabezaba el grupo de gente armada, y fué él quien primero disparó; que como los del grupo iban a pié, no les dieron alcance, llegando empapados de agua por la lluvia, a Tequisquiapan; que gastaron al rededor de veinticinco cartuchos durante el tiroteo que duró cerca de una hora, no conociendo a ninguno de los asaltantes, pero que notaron poco antes de lo acaecido, que mucha gente de "Rancho Nuevo", y "La Petaca", se movilizaba con dirección a una loma, viendo también que los de "La Grulla", hacían lo mismo, sin que por esto tuvieran cuidado, porque pensaron que irían a una boda. Yáñez dijo tener casi la certeza de que el mayordomo de la finca, León Cervantes, en connivencia con el patrón señor Jesús Sánchez, fueron los autores intelec-



-14-

90

tuales de los asesinatos, ya que con anterioridad el mismo mayordomo les tenía mala voluntad y les había hecho la amenaza de matarlos; que el propietario Jesús Sánchez, dijo en una ocasión a Cipriano López, que tenía que hacer - desaparecer a cuanto agrarista hubiera en su hacienda, y - aunque él personalmente no lo llevaría a cabo, tenía gente que por medio de su dinero lo realizaría; que el referido Sánchez se encuentra disgustado con todos los ejidatarios por haber solicitado tierras en su hacienda, y como el día de los hechos se estaba midiendo el terreno para repartirlo, seguramente esta circunstancia lo orilló a mandar gente armada para asesinarlos. Por su parte Felipe López agregó que tiene la presunción de que el propietario de la hacienda Jesús Sánchez Jr., en connivencia con el mayordomo, son los autores intelectuales de los asesinatos, pues con anterioridad los había amenazado con hacerlos desaparecer, no personalmente, sino por medio de su dinero, ya que contaba con la gente suficiente para hacerlo. Esta amenaza, concluye el propio testigo, la hizo personalmente Sánchez a Cipriano López, hace algún tiempo. Careado Julián Yáñez con Sánchez Fuentes, el primero dijo - que supo lo declarado por boca del occiso Cipriano López, - y niega haber expresado que tenía la certeza de que su - careante y León Cervantes hubiera mandado matar al Ingeniero Rubio y a los tres ejidatarios que lo acompañaban. - Careado a su vez Felipe López con Jesús Sánchez Fuentes, - aquél se sostuvo en su declaración y agregó que su careante una vez embriagó a la gente de "La Petaca" para que se les echaran encima, acto que el acusado negó afirmando -

que carece de fundamento, pues no consta a su careado que hubiese emborrachado a la gente ni siquiera aconsejado, - porque estos individuos, (refiriéndose a los agraristas), - aprovechándose de que tenían armas, comenzaron a extorsionar a todos los habitantes de "La Petaca", que no eran agraristas, no dejando ni siquiera que sus animales bebiesen agua en el río y cosas por el estilo, dando lugar a -- que la gente se quejara ante Sánchez Fuentes, quien los -- mandó a dar cuenta a las autoridades. Agrega el propio inculpado que tiene entendido que éstas les dieron un pliego para instruirlos en sus obligaciones, pero que no supo más sino hasta después de una semana en que el mayordomo le dió parte de que la gente se había amotinado, siendo -- el de la voz completamente ajeno a este acto, ya que después de que ocurrieron a las autoridades no volvieron a -- decirle nada. En resumen, la lectura de los testimonios -- que han quedado enunciados, producen en el ánimo del Juzgador una verdadera perplejidad, tanto por la completa -- vaguedad de los datos relativos a la animadversión que -- se atribuye al acusado Jesús Sánchez Fuentes en contra de los agraristas, como por la incertidumbre de los deponentes quienes con absoluta inseguridad en sus primeras declaraciones que en su mayor parte negaron después, se redujeron a considerar el caso subjetivamente, mediante suposiciones basadas en aquella animadversión que además de que no atestiguaron a ciencia cierta, ni siquiera llegaron a precisarla en su tesitura, si se atiende a que por un lado -- Luisa Ramírez, observando una conducta asaz contradictoria, que motivó su procesamiento y condenación por false--





-15-

dad en declaraciones judiciales, habla de odios, que por razón natural presuponen una inquina enconada, y por otro los restantes aluden a amenazas de muerte, a injurias, a disgustos y aun a simples enemistades que por su variada intensidad afectiva, vedan estimar el grado de la repetida animadversión, que como es fácil suponer, constituye un requisito sine qua non, para determinar la mayor o menor predisposición de Sánchez Fuentes hacia las víctimas del delito, así como, si es de inferirse lógicamente su participación o autoría intelectual en el hecho criminoso que se persigue. La indecisión y vaguedad de que adolecen los testimonios de que ya se hizo mérito, tiene vital importancia en el caso, porque sólo fijando las condiciones psicológicas de indignación en que se encontraba el Ingeniero Sánchez Fuentes, por la dotación ejidal decretada contra la hacienda que administraba, se puede llegar a establecer con recto criterio lógico, la ofuscación más o menos grande de su ánimo, que lo impulsara a delinquir hasta extremo tan grave, máxime si se tiene en cuenta que no aparece demostrado de autos que el multicitado reo sea capaz de ejecutar actos antijurídicos, como los que se sancionan, porque se trate de un individuo dotado de sentimientos sanguinarios y feroces, o ayesado al crimen. Si aisladamente considerados los atestados de referencia, no merecen crédito por las razones ya expuestas, tampoco son admisibles en su conjunto de suerte que administrados pudieran configurar con arreglo a la ley la prueba presuncional, pues resulta imposible enlazar declaraciones abiertamente contradicto-

rias, que en vez de armonizarse entre sí, discrepan hasta engendrar la duda judicial; pues resumiéndolas se advierte: que Luisa Ramírez, independientemente de su manifiesta inidoneidad, supone en el acusado una participación derivada del odio que le tiene a los agraristas, aseveración que después niega; Gregoria López, solo habla de disgustos que existían entre uno de los occisos, su padre Cipriano López y el dueño de la hacienda y su mayordomo, porque el extinto era agrarista, y hace mención de que alguna vez Sánchez lo injurió al verlo barbechar tierras de la finca, pero en un posterior careo, negó asimismo tales afirmaciones; Ricardo Calderón, tiene el carácter de un simple testigo de oídas y su dicho se contrae a reproducir informes que le dieron Julián Yáñez y Felipe López, en cuanto a la mecánica de los hechos investigados, pues no fué presencial de los mismos, y agrega que también supo de una amenaza de muerte proferida por Sánchez Fuentes contra los miembros de la Defensa Agraria, pero sin precisar de donde adquirió ese conocimiento; Susana Delgado, esposa del extinto Simeón López, al identificar el cadáver de éste, expresó no constarle nada sobre su muerte, y que su marido se encontraba enemistado tanto con el mayordomo de la finca León Cervantes, como con el propietario Jesús Sánchez Jr., por razones agrarias y que el mencionado Sánchez injurió en dos ocasiones al finado López, por lo que supone que los repetidos Sánchez y Cervantes, estuvieron en connivencia con la gente que cometió el asalto. Sin embargo tal testimonio parece sospechoso de parcialidad porque careada su autora con León Cervantes, dijo tener mucho co-



-16-

raje por las amenazas proferidas y por la muerte de su es-  
 poso; J. Encarnación Zamora, pone en boca de Sánchez Fuentes  
 una expresión despectiva para los agraristas, pero advierte  
 no tener idea alguna sobre quienes pudieron ser los auto-  
 res de los homicidios; Miguel García, a pesar de ignorar los  
 acontecimientos agregó que el patrón y el mayordomo hos-  
 tilizaban a los agraristas, aventurando la hipótesis de --  
 que pudieran ser ellos los autores del delito porque el --  
 primero dispone de elementos pecuniarios para pagar gente  
 que lo cometiera; y, por último, Julio Sánchez, sin saber  
 nada de los hechos, únicamente habla de mala voluntad por  
 parte de los multicitados Sánchez Jr. y Cervantes, hacia -  
 los agraristas, impidiéndoles cultivar sus terrenos, y de  
 una plática habida entre León Cervantes y Baldomero Gonzá-  
 lez, en el sentido de que aquél dijo que los tantas veces  
 citados agraristas, ya lo tenían "enmuinado", y que quería  
 que los mataran a todos, agregando que en cierta ocasión -  
 Julián Yáñez y Felipe López, esto es, los dos supervivien-  
 tes de la actual tragedia, trataron de asesinar a Gonzá-  
 lez porque los hostilizaba. Con posterioridad en el careo  
 que el propio testigo sostuvo con Sánchez Fuentes, aclaró  
 su depuesto en el sentido de que no le consta que este úl-  
 timo se haya opuesto a que los agraristas cultivaran sus -  
 tierras, negando la mala voluntad de aquél hacia estos.--  
 El resumen anterior destaca la disimilitud de datos que -  
 se desprenden de los testimonios que tuvo en cuenta la --  
 responsable en el fallo que se le reclama, --desde el odio--  
 hasta la simple mala voluntad, pasándose por las amena-  
 zas de muerte y las injurias atribuidas al acusado en --

medio de una completa indecisión por parte de los deponentes-, y en tal orden de conceptos no es posible fundar - un criterio firme sobre el particular, surgiendo consecuentemente la duda, la cual se ahonda más en el ánimo de esta Sala, si se estima que los testimonios de Julián Yáñez y Felipe López, quienes sobrevivieron al asalto, en vez de ofrecer la seguridad que cabe suponer en los mismos por su carácter de presenciales de los sucesos, y de ofendidos, por el inminente peligro en que se vieron de sufrir la suerte que siguieron las demás personas del grupo asaltado, se producen con análoga imprecisión, pues Yáñez, dijo saber lo que declaró en contra de Sánchez Fuentes, por boca del occiso Cipriano López, pero negó haber expresado que tenía la certeza de que este acusado y León Cervantes hubieran mandado dar muerte al Ingeniero Rubio y acompañantes. Hecho el anterior estudio, solo resta analizar - la declaración de J. Jesús Reyna, coacusado del quejoso - en este ampro, la cual debe desestimarse por ser de muy - sospechosa veracidad, ya que si en un principio formuló - concretamente en contra de Sánchez Fuentes, el cargo de haber sido el intrigador de los homicidios, pagando gente - para que los realizara, con posterioridad se retractó de - todo esto, afirmando primero que declaró constreñido para ello y luego que lo hizo por "punto de borrachera", y si - bien es cierto que la causa de la retractación no aparece comprobada, no por esto llega a ser merecedor de crédito, en razón de que su aserto entraña una serie de inverosimilitudes, desvirtuadas por lo que declararon los testigos - presenciales ya señalados, o sean Julián Yáñez y Felipe --



-17-

López. En efecto, de este testimonio aparece que el día de los acontecimientos, León Cervantes y otros muchas personas invitaron a Reyna para que se reuniera con aquéllos en casa de Ezequiel Sandoval, quien les proporcionaría armas y parque suficientes, para matar al Ingeniero Roque Rubio y demás agraristas que andaban repartiendo tierras de su patrón; que el emitente no aceptó esa invitación, pero que lo llevaron a la fuerza, reuniéndose todos en la "Grulla de Abajo", como a las doce horas del día señalado; que platicaron por espacio de tres horas para planear todo el asunto y después Sandoval les entregó armas y parque a todos los reunidos; que entonces el grupo se dirigió a los bordos que están frente a "La Grulla", donde sabían que andaba trabajando el Ingeniero Rubio y sus agraristas, habiendo llegado a dicho lugar León Cervantes y Timoteo Peña, distribuyeron a la gente dispersándolos en grupos de tres en tres; que al notar que ya andaban trabajando el Ingeniero y sus agraristas, Cervantes y Peña dieron la orden de hacer fuego, cosa que hicieron cayendo muertos el repetido Ingeniero y sus acompañantes; que el declarante presencié todo ésto, pero que no disparó, y que si estuvo en el lugar fué porque lo llevaron a la fuerza, habiéndose colocado junto a Ezequiel Sandoval y Santiago Godínez; que cometidos los crimines, se dirigieron a "La Grulla" a comerse todas las mercancías que había en la tienda de Apolonio González, y al de la voz le dió Ezequiel Sandoval unos cigarros, y mezcal para que bebiere, haciéndoselo tragar "casi a huevo"; que en la tienda los repetidos Cervantes y Peña dieron dinero a todos los



que intervinieron en los hechos narrados, entregando a cada uno siete <sup>323</sup> pesos, pero que al deponente no le dieron ni un centavo; que el pago fué hecho en billetes y en plata, y después se dirigieron a Santas Marías, a San Isidro, -- al Jardín, a la "Puerta de la Burra", al "Chivato" y por último a "Los Altos", en donde soltaron a Reyna, yéndose éste para su casa; que el declarante sabe que el dinero repartido por Cervantes y Peña fué entregado por don Jesús grande, esto es Sánchez Cervantes y el Ingeniero Jesús Sánchez Fuentes, porque vió cuando éstos señores hicieron la entrega en la Hacienda de "La Petaca", como dos días antes del crimen. Una sencilla comparación del anterior atestado con los rendidos por Julián Yáñez y Felipe López, pone de relieve su inexactitud, siendo notorias las inverosimilitudes que entraña, destacándose de entre ellas la relativa a que el grupo de atacantes, después del asalto se haya ido a "La Grulla", para comer todas las mercancías que había en la tienda de Apolonio González, cosa -- increíble si se tiene en cuenta que por regla general, -- los delincuentes obedeciendo a un instintivo sentimiento de defensa, tienden a escapar de la acción de la justicia una vez cometido su delito, y cuando actúan en grupo, procuran dispersarse, ya que es elemental suponer que de no -- hacerlo facilitan grandemente su persecución y captura; -- la concerniente a que Reyna hubiese visto cuando el Ingeniero Sánchez Fuentes y su padre, Jesús Sánchez Cervantes, entregaron a Peña y a León Cervantes, el dinero que se utilizaría para pagar a la gente, afirmación rayana en la puerilidad, porque a nadie se oculta que actos semejan-



-18-

tes se realizan invariablemente con el debido sigillo, evitando la presencia de personas extrañas que no son de confianza, como sin duda lo era el testigo de que se trata, - si se atiende a que él mismo manifiesta que fué llevado a la fuerza y no por su voluntad. Delo dicho se sigue que - es ostensible la falta de veracidad en el testimonio de -- Reyna, y por tanto carece de todo valor probatorio, aun -- haciéndose caso omiso de su retractación, pues dado el -- artificio que del mismo se advierte, su sola lectura produce la impresión de que se encuentra forjado con el inapropósito de formular un cargo directo contra los acusados Sánchez Fuentes y Cervantes, al propio tiempo que - de evitar en lo posible la responsabilidad que de esa declaración pudiera derivarse para el emitente. Significan lo primero la aseveración referente a la pretendida entrega de dinero en presencia del testigo, hecha por el tantas veces nombrado Ingeniero Sánchez Fuentes y su padre, al mayordomo León Cervantes y a Timoteo Peña, así como la imputación que se contrae a que estos dos últimos fueron los que dieron la orden para que se hiciera fuego sobre los asaltados; denotando lo segundo, el manifiesto afán del deponente en expresar que fué constreñido a formar parte de los asaltantes, limitándose Reyna a presenciar los sucesos sin disparar contra los ofendidos, que en la tienda de Apolonio González fué forzado por Ezequiel Sandoval para que tomara mezoal, y finalmente que hecho el reparto del dinero a la gente, al propio Reyna no le dieron un solo centavo. La presencia de León Cervantes sostenida en la anterior declaración, se encuentra desmentida

con lo atestiguado por Julián Yáñez y Felipe López, quienes de común acuerdo en su calidad de presenciales de los acontecimientos, dijeron que el grupo de individuos que los asaltó estaba integrado por gente desconocida para ellos, y en tal virtud resulta inexacto que el mencionado Cervantes, de sobra conocido para Yáñez y López, haya sido uno de los que ordenaron el ataque contra los occisos. A los razonamientos anteriores cabe agregar, que la deposición analizada constituye un testimonio singular, que conforme a la fracción II del artículo 82 del Código de Enjuiciamientos Penales, que rige en la localidad, necesitaría verse sobre actos sucesivos referentes a un mismo hecho, para producir presunción, y esta Sala ha sostenido el criterio de que lo depuesto por testigos singulares, puede integrar la prueba presuntiva del acto que trate de justificarse en el proceso, siempre que reúna los requisitos de ley, extremo que, como ya se ha visto, no se satisface en la especie. Es cierto que existe jurisprudencia uniforme y constante elaborada en el sentido de que la evaluación de los indicios debe ser hecha en conciencia por los jueces; pero esa misma jurisprudencia restringe tal facultad subjetiva, sometiéndola a la observancia de determinadas reglas deducidas del texto de la ley, entre las que se cuentan, desde luego, la concerniente a que los hechos de que las presunciones dimanen se comprueben en forma fehaciente, de donde se sigue que si el sentenciador contraviene los elementos normativos de ese medio de convicción, o altera la verdad de los hechos, su proceder entra en pugna con los mandamientos de la Ley Suprema. Así mismo, se han fijado por la Sala en diversas ejecutorias los requisitos que de acuerdo con la doctrina debe tener -



-19-

la certeza adquirida por el Juez, siguiendo el testimonio íntimo de su conciencia; tal certeza debe ser natural, es decir, debe nacer de la acción genuina de las pruebas, naturalmente, y no de modo artificial, o sea por virtud de razones extrañas a su intrínseca certeza y propia naturaleza. El convencimiento del Juez debe ser razonable, esto es, las razones que lo han determinado a fallar en cierto sentido, deben ser tales que se consideren capaces de engendrar -- igual convencimiento, en otros hombres razonables y libres de preocupaciones. Este último requisito dará a la certeza del Juez, el carácter que los tratadistas llaman social, y que consiste en que los motivos de credibilidad aceptados por aquél sean tales, que cuenten con la sanción de toda la sociedad, interesada tanto en que se repriman los delitos, como en que no se castigue a los inocentes; para conseguir ésto, se aconseja la publicidad de la motivación de la sentencia, cosa fácil cuando se trata de fallos dictados por el jurado popular, pero no cuando se está en presencia de jueces de derecho, en quienes no es absoluta la soberanía de apreciación, como lo es en el jurado; ahora bien, partiendo del principio de que no hay efecto sin causa, se deduce que en todo delito ha de haber un motivo y que el conocimiento de éste, facilita el esclarecimiento del hecho que se trata de averiguar; pero si el motivo no está plenamente probado, sino que hay solo un indicio, cuya existencia se deduce en relación con el hecho principal, es incuestionable que, por sí mismo, no lo explica, y la falta de precisión para inferir los motivos del crimen, bastan para engendrar duda respecto --

del encadenamiento de las presunciones. Las declaraciones de los testigos, que pueden constituir o establecer un indicio, se desvirtúan, sin género de duda, por las contradicciones que haya en sus diversas declaraciones, o por la falta de crédito que merezcan por diversas causas, y si las presunciones en que el Juzgador se apoyó para condenar, también pueden enlazarse para establecer que el -- sentenciado no fué el responsable del delito que se le imputa, es incuestionable que hay una ilegal apreciación de la prueba presuntiva, y que habiendo duda respecto de la responsabilidad del reo, debe absolversele. En la especie, ya se enunciaron las numerosas contradicciones, así como las inverosimilitudes que vician la credibilidad que debieran merecer los testimonios en que se basa la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, tanto para inferir el odio inductor, a juicio de dicha autoridad, de la participación delictiva atribuida a Sánchez Fuentes, así como la de hechos secundarios al redor de los cuales el fallo contiene tan débiles raciocinios que bien pudieran considerarse como simples conjeturas, tales como los que se contraen al informe obtenido por el Comandante del Diecinueve Regimiento, de un peón al servicio de los acusados, quien expresó que el administrador de "La Petaca" es uno de los inodados en los sucesos, siendo que ni siquiera llegó a identificarse a la persona del peón informante; el alusivo a que el día de los sucesos ninguna partida rebelde incursionó en la zona, -- argumento que se destruye fácilmente con solo tener en consideración que aun siendo verídica la circunstancia que entraña, no debe inferirse de ella la incriminación del --





96

-20-

quejoso, dado que de lo depuesto por éste en la diligencia de careo que sostuvo con Felipe López, se viene en conocimiento de que existía un bando antagónico de los agraristas, en razón de que éstos aprovechándose de las cosas que tenían, comenzaron a extorsionar a los que les eran contrarios, sin siquiera permitirles que sus animales tomaran agua en el río, corroborándose ese antagonismo con lo manifestado por Julio Sánchez en el sentido de que en cierta ocasión Julián Yáñez y el propio Felipe López querían matar a Baldemaro González, porque éste hostilizaba a los ejidatarios. Estas constancias destacan la inexactitud en que incurre la responsable al afirmar en el segundo apartado del párrafo quinto del Considerando a estudio, que no consta del proceso que los occisos hubiesen tenido alguna otra enemistad. Finalmente, es por completo deleznable la inducción que la propia autoridad hace sobre la actitud pasiva de Sánchez Fuentes y Gerantes suponiéndolos conocedores del movimiento llevado a cabo por los cincuenta asaltantes armados, derivando de esa anuencia la conclusión de que dichos inculpadados autorizaron y aun ordenaron los homicidios del Ingeniero Rubio y sus acompañantes. Lo erróneo de esta argumentación estriba en desprender de una simple anuencia, esto es, del conocimiento que el Ingeniero Sánchez Fuentes se supone que tuvo con motivo de la importancia numérica de los asaltantes que se reunieron en la finca por él administrada, el extremo opuesto a esta actitud pasiva, cual es el de haber ordenado el asalto, cosa que implica un acto de

voluntad en el agente infractor que en modo alguno puede inferirse de aquel simple asentimiento, no comprendido dentro de lo previsto por el artículo 9o. del Código Penal, porque este precepto, dados los términos de su redacción al señalar como responsable a todos los que toman parte en la concepción, preparación o ejecución de un delito, o prestan auxilio o cooperación de cualquiera especie, por concierto previo o posterior o inducen directamente a alguno a cometerlo, requiere siempre un positivo acto de voluntad en el participante, con exclusión de la conducta pasiva implicada por el simple conocimiento y por la ausencia de que habla la jurisdicción sentenciadora. Las anteriores argumentaciones obliga a afirmar que la Sala demandada, incurrió en la indebida apreciación de la prueba presuntiva que se analiza, infringiendo las normas reguladoras de la misma, al asignarle valor probatorio pleno sin haberse acreditado cumplidamente los hechos que deben servir de apoyo a las presunciones, ni la relación de causalidad más o menos necesaria de que ya se hizo mérito. En estas condiciones, resulta dudosa la responsabilidad del acusado, razón por la que legalmente debió absolversele, y, por ende, su condenación es contraria a las garantías que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, siendo procedente conceder el amparo de la Justicia de la Unión que se demanda.


Por todo lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 103 fracción I y 107 fracciones II y VIII constitucionales, 44, 45, 76 a 78, 158, 184 y 186 de la -




-21-

Ley Reglamentaria que rige la materia y 24 de la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO:- La Justicia de la Unión ampara y protege al Ingeniero J. Jesús Sánchez Fuentes, representado en este juicio por su defensor el Licenciado Emilio Pardo Aspe, - contra el acto que reclama de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, que hizo consistir en la sentencia definitiva que esta autoridad pronunció en grado de apelación el dos de junio del año - próximo pasado, por la cual modifica el fallo dictado el veintinueve de junio de mil novecientos treinta y ocho, - por el Juez de Primera Instancia del Partido de Allende, - en la relacionada Entidad, y declara al quejoso y a sus coacusados León Cervantes y J. Jesús Reyna, criminalmente responsables, como coparticipes del delito de homicidio calificado cometido en las personas del Ingeniero Roque R. Rubio, y de los campesinos Severo Delgado, Simeón y Cipriano López; aplicando respectivamente a los referidos acusados, las sanciones de veinte, quince y trece -- años de prisión, impuestas en calidad de retención hasta -- por una mitad más de ese tiempo en su caso, y con efectos de suspensión en el ejercicio de los derechos de los reos, con apego al artículo 42 del Código Penal. Asimismo los -- condena a pagar en forma solidaria y mancomunada, por concepto de reparación del daño; la cantidad de cincuenta mil cuatrocientos pesos, a los deudos del Ingeniero Roque R. -- Rubio, señores Claudio Rubio, Ana María Martínez de Rubio, Claudio, Gustavo, Elena, Natalia y Raymundo Rubio y Martínez, la de cinco mil seiscientos pesos a los familiares --

  
Cotejado con el  
proyecto aproba  
do por el C. Mi  
nistro Luis G.  
Caballero.-----

del occiso Simeón López, señores Marcos y María Pabla Ló-  
pez y Susana Delgado, y la de dos mil ochocientos pesos,-  
a los del extinto Severo Delgado, señores Tránsito Delga-  
do, Severo Delgado Jr., María Luz López y Manuela Delgado;  
absolviendo a dichos procesados, de todo pago por el alu-  
dido concepto de reparación del daño, en lo que concierne  
al ofendido Cipriano López. La resolución de que se vie-  
ne hablando, absuelve, además, a los enjuiciados Rafael ,  
e Hipólito Mares, José Simeón y Octaviano Rodríguez, J. -  
Jesús Delgado, Isidro Gloria y Marcial Cruz, de la acusa-  
ción que por el expresado delito formuló en su contra el -  
Ministerio Público, mandándolos poner en libertad, y fi-  
nalmente, deja abierta la causa por lo que atañe a los in-  
culpados prófugos, Timoteo Peña, León González, Santiago -  
Baldomero, Antonio y León Godínez, Baldomero Pérez, Anto-  
nio, Jesús, Ponciano y Alejo Gloria, Antonio y Juan Rodrí-  
guez, José, Dolores, Jesús y Pedro Mares, Julián Vázquez,  
Tiburcio Guzmán, Martín Pérez, Modesto Juárez y Ezequiel -  
Sandoval, para cuando se logre la captura de estos indi-  
viduos.

  
SEGUNDO:- Notifíquese; publíquese; expídase testimo-  
nio de la presente resolución devuélvase el Toca respec-  
tivo al Tribunal designado como responsable; por conducto  
del mismo, remítanse los autos al Juzgado de su origen, y -  
en su oportunidad, archívese este juicio.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte -  
de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos -  
en virtud de la ausencia del Ministro Chávez. Firman el -  
Presidente y demás Ministros que integraron la Sala, con -

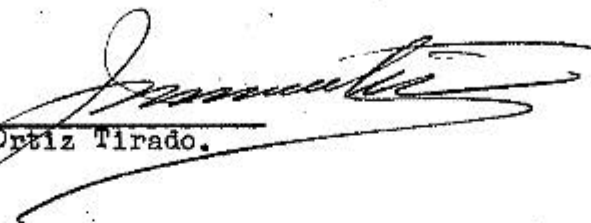
Exp. Núm. 4144/39. 2a.

-22-


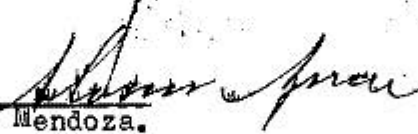


el Secretario que autoriza y da fe.


PRESIDENTE:

  
José Ortiz Tirado.

MINISTROS:

  
Jesús Garza Cabello.
  
Luis G. Calvillo.
  
Alonso Aznar Mendoza.

SECRETARIO:

  
Soto Gordoa.



JUN 27 1940

En.....se libró

oficio al Juez de Distrito de *Guaymas* comunicándole el acuerdo anterior, para que lo notifique a *los*

.....*Guaymas*.....

JUN 27 1940

En.....por lista de la misma fecha se,  
notificó la resolución anterior, a los interesados y  
al Ministerio Público Federal.